

CONV 579/03

NOTA

del: Praesidium

a la: Convención

Asunto: Proyecto de protocolos sobre:

- la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad
 - el cometido de los parlamentos nacionales en la Unión Europea
-

INTRODUCCIÓN

El Praesidium ha acordado presentar conjuntamente a la Convención el proyecto de estos dos protocolos a fin de que tengan una visión de conjunto sobre los aspectos fundamentales del cometido de los parlamentos nacionales en la vida democrática europea. Se adjunta a los miembros de la Convención:

- una presentación de cada uno de estos protocolos;
- en el anexo I, el proyecto de texto propuesto por el Praesidium para el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;
- en el anexo II, comentarios técnicos sobre dicho protocolo;
- en el anexo III, el proyecto de texto propuesto por el Praesidium para el Protocolo sobre el cometido de los parlamentos nacionales;
- en el anexo IV, comentarios técnicos sobre dicho protocolo.

Protocolo sobre el respeto de la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad

La declaración adoptada en el Consejo Europeo de Laeken recordaba las expectativas del ciudadano europeo, que deseaba "un enfoque comunitario claro, transparente, eficaz y conducido democráticamente" y no unas "instituciones europeas que se inmiscuyan en todo". En este contexto, la Declaración de Laeken subrayaba la necesidad de un mejor reparto y definición de las competencias de la Unión Europea y se interrogaba sobre el papel que podían desempeñar en ella los parlamentos nacionales en el contexto de un mayor respeto del principio de subsidiariedad, "¿Deben centrarse en el reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros, por ejemplo, mediante un control previo del respeto del principio de subsidiariedad?".

El Grupo I se ha esforzado en responder a las cuestiones que figuran en la declaración de Laeken relativas al principio de subsidiariedad y ha adoptado algunas propuestas, que figuran en su informe final (CONV 286/02). El Grupo ha sentado una serie de principios ("normas de oro") y orientaciones con el fin de garantizar una mejor aplicación del principio de subsidiariedad, velando al mismo tiempo por que estas mejoras no conduzcan ni a un bloqueo, ni a un entorpecimiento de la toma de decisiones en las instituciones. El Grupo ha considerado asimismo que el principio de subsidiariedad es un principio de naturaleza fundamentalmente política, cuya responsabilidad debe corresponder en primer lugar a órganos políticos. El Grupo ha llegado a una serie de propuestas que se articulan en torno a tres ejes:

- reforzar la consideración y aplicación del principio de subsidiariedad por parte de las instituciones que participan en el proceso legislativo;
- instaurar un mecanismo de alerta rápida (*early warning system*) de naturaleza política encaminado a fortalecer el control del respeto del principio de subsidiariedad por parte de los parlamentos nacionales. Este mecanismo ofrecería a cada parlamento nacional la posibilidad de enviar a las instituciones europeas, en el plazo de seis semanas a partir de la transmisión de una propuesta legislativa de la Comisión, un dictamen motivado en el que se expusieran sus temores en cuanto a una violación del principio de subsidiariedad;
- ampliar la posibilidad de recurso al Tribunal de Justicia por incumplimiento del principio de subsidiariedad.

Estas propuestas se debatieron detenidamente en la sesión plenaria del 3 y 4 de octubre de 2002 (véase CONV 331/02). Los debates se centraron en el mecanismo de alerta rápida y en su funcionamiento, así como en las condiciones de recurso al Tribunal de Justicia. Tras los debates, el Presidente constató un amplio acuerdo sobre las propuestas consignadas en el informe del Grupo. Asimismo, reseñó una serie de temas o cuestiones que debían ser objeto de un examen complementario:

- si el derecho de alerta rápida se ha de conferir al parlamento como tal o a alguna de sus dos cámaras en el caso de los Estados bicamerales;
- fijación del umbral de parlamentos nacionales requerido para poner en marcha un nuevo examen de su propuesta por parte de la Comisión;
- necesidad de establecer un vínculo entre la puesta en marcha del mecanismo de alerta rápida y el derecho de recurrir al Tribunal.

Tras haber estudiado nuevamente estas diferentes cuestiones, el Praesidium acordó proponer que:

- la facultad de activar el mecanismo de alerta rápida debería confiarse a cada parlamento nacional y que correspondía a éste organizar el procedimiento interno de consulta de cada una de las cámaras en el caso de parlamentos bicamerales o, en su caso, de los parlamentos regionales con competencias legislativas;
- el umbral debería fijarse en un tercio de los parlamentos nacionales, tal como había sugerido el Grupo;
- el Tribunal de Justicia debería tener competencia para conocer de recursos por violación del principio de subsidiariedad interpuestos por los Estados miembros, a instancia, si procede, de sus parlamentos nacionales o de sus parlamentos regionales con competencia legislativa. El Comité de las Regiones también debía disponer de la misma facultad respecto de los actos legislativos en relación con los cuales se le consultó.

Protocolo sobre el cometido de los parlamentos nacionales en la Unión Europea

La Declaración de Laeken recordó que «la Unión Europea extrae su legitimidad de los valores democráticos que proyecta, de los objetivos que persigue y de las competencias e instrumentos de que dispone», pero también que «el proyecto europeo extrae también su legitimidad de instituciones democráticas, transparentes y eficaces». En ella se indicó además que «los parlamentos nacionales también contribuyen a legitimar el proyecto europeo» y se recordó que la Declaración sobre el futuro de la Unión, aneja al Tratado de Niza, había subrayado la necesidad de estudiar el papel de los parlamentos nacionales en la construcción europea.

Con esta idea se creó el Grupo IV de la Convención sobre el papel de los parlamentos nacionales. Los trabajos del Grupo se refirieron a tres apartados separados: el papel de los parlamentos en el control de los gobiernos, el papel de los parlamentos nacionales en la supervisión de la aplicación del principio de subsidiariedad (tema tratado en primer lugar por el Grupo I de la Convención), así como el papel y el funcionamiento de los mecanismos y relaciones de carácter interparlamentario. El Grupo adoptó una serie de recomendaciones específicas, en particular sobre medidas que deben adoptarse en las instituciones de la Unión con el fin de facilitar el control ejercido por los parlamentos nacionales de los Estados miembros sobre su propio gobierno en lo que se refiere a las actividades de la Unión (CONV 353/02). Estas recomendaciones, que se refieren más concretamente al acceso de los parlamentos nacionales a la información, recibieron un amplio apoyo de la Convención en el debate plenario consagrado al informe del Grupo IV del pasado 28 de octubre (CONV 378/02).

La puesta en práctica de una serie de recomendaciones del Grupo IV exige la modificación del Protocolo sobre el cometido de los parlamentos nacionales en la Unión Europea, anejo al Tratado de Amsterdam. Las modificaciones en cuestión se refieren sobre todo a la información destinada a los parlamentos nacionales en relación con propuestas legislativas y otros documentos. Las recomendaciones específicas del Grupo IV en estos ámbitos eran los siguientes:

- la Comisión debería transmitir directamente a los parlamentos nacionales todas las propuestas legislativas y todos los documentos de carácter consultivo, al mismo tiempo que al Parlamento Europeo y al Consejo;

- la Comisión debería transmitir simultáneamente a los parlamentos nacionales, al Parlamento Europeo y al Consejo su estrategia política anual y su programa legislativo y de trabajo anual;
- el Tribunal de Cuentas debería transmitir simultáneamente a los parlamentos nacionales, al Parlamento Europeo y al Consejo su informe anual;
- los resultados del Consejo deberían transmitirse a los parlamentos nacionales (y al Parlamento Europeo) al mismo tiempo que a los gobiernos.

El proyecto del Protocolo modificado tiene en cuenta las medidas recomendadas por el Grupo IV. Por otra parte, se proponen algunas modificaciones técnicas con el fin de adaptar el texto del protocolo a los trabajos de la Convención (recomendaciones del Grupo IX "Simplificación", relativas a la denominación de los actos; referencias a los artículos en la primera o en la segunda parte de la Constitución). Además, se ha incluido un apartado que introduce una referencia al Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, con el fin de poner de manifiesto la lógica común que une estos dos protocolos.

o

o

o

PROYECTO

**[PROTOCOLO] SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE
SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD**

LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES,

DESEANDO asegurar que las decisiones se tomen lo más cerca posible de los ciudadanos de la Unión;

DECIDIDAS a establecer las condiciones para la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad enunciados en el artículo 7 de la Constitución, así como a instaurar un sistema de control de la aplicación por las instituciones de dichos principios,

HAN ACORDADO las siguientes disposiciones, que se incorporarán como anexo a la Constitución:

1. Cada institución deberá garantizar de manera permanente el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad definidos en el apartado 3 del artículo 8 de la Constitución.
2. Antes de proponer un acto legislativo, la Comisión procederá a amplias consultas, salvo en casos especiales de urgencia o confidencialidad. Estas consultas deberán tener en cuenta, cuando proceda, la dimensión regional y local de las acciones consideradas.
3. La Comisión remitirá todas sus propuestas legislativas, así como sus propuestas modificadas, a los parlamentos nacionales de los Estados miembros al mismo tiempo que al legislador de la Unión. El Parlamento Europeo remitirá sus resoluciones legislativas y el Consejo sus posiciones comunes a los parlamentos nacionales de los Estados miembros inmediatamente tras su adopción.

4. La Comisión motivará su propuesta en relación con el principio de subsidiariedad. Toda propuesta legislativa debería incluir una ficha con pormenores que permitan evaluar el cumplimiento del principio de subsidiariedad. Esta ficha debería incluir elementos para evaluar el impacto financiero, así como de los efectos, de tratarse de una ley de bases, en la normativa que han de desarrollar los Estados miembros, incluida, cuando proceda, la legislación regional. Las razones para concluir que un objetivo de la Unión puede lograrse mejor a su nivel deberán justificarse mediante indicadores cualitativos o, cuando sea posible, cuantitativos. La Comisión tendrá debidamente en cuenta la necesidad de que cualquier carga, tanto financiera como administrativa, que recaiga sobre la Unión, los gobiernos nacionales, las autoridades regionales o locales, los agentes económicos o los ciudadanos deberá ser reducida al mínimo y deberá ser proporcional al objetivo que se desee alcanzar.
5. Todo parlamento nacional de un Estado miembro podrá, en el plazo de seis semanas a partir de la fecha de transmisión de la propuesta legislativa de la Comisión, enviar a los presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión un dictamen motivado que exponga las razones por las que considera que la propuesta no se ajusta al principio de subsidiariedad. Incumbirá a cada parlamento nacional organizar los procedimientos internos de consulta de cada una de las cámaras, en el caso de los parlamentos bicamerales, o, cuando proceda, de los parlamentos regionales con competencias legislativas.
6. El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión tendrán en cuenta los dictámenes motivados de los parlamentos nacionales.

Cuando al menos un tercio de los parlamentos nacionales emitan dictámenes motivados sobre el incumplimiento del principio de subsidiariedad por la propuesta de la Comisión, ésta deberá volver a estudiar su propuesta. Tras este nuevo estudio, la Comisión podrá decidir mantener su propuesta, modificarla o retirarla. La Comisión motivará su decisión.

7. Los parlamentos nacionales de los Estados miembros podrán asimismo, en el plazo entre la convocatoria de la reunión del Comité de Conciliación y su celebración, emitir un dictamen motivado con las razones por las que consideran que o bien la posición común del Consejo, o bien las enmiendas del Parlamento Europeo incumplen el principio de subsidiariedad. En la reunión del Comité de Conciliación, el Parlamento Europeo y el Consejo tendrán muy en cuenta los dictámenes emitidos por los parlamentos nacionales de los Estados miembros.
8. En virtud del artículo [actual artículo 230] de la Constitución, el Tribunal de Justicia será competente para conocer de recursos por violación del principio de subsidiariedad interpuestos por los Estados miembros, a instancia si procede de sus parlamentos nacionales y de acuerdo con sus respectivos ordenamientos constitucionales. De conformidad con el mismo artículo de la Constitución, el Comité de las Regiones también podrá interponer tales recursos respecto de actos legislativos sobre los que se le haya consultado.
9. La Comisión presentará al Consejo Europeo, al Parlamento Europeo y al Consejo un informe anual sobre la aplicación del apartado 3 del artículo 8 de la Constitución. Dicho informe anual se remitirá remitirse asimismo al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social.

**COMENTARIOS RELATIVOS AL PROYECTO DEL TEXTO DEL
PROTOCOLO SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE
SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD**

El texto propuesto se inspira en el contenido del actual Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, tal y como lo incorporó el Tratado de Amsterdam. No obstante, el texto actual se ha reducido y simplificado con el fin hacerlo compatible con la naturaleza de un protocolo anejo a una Constitución.

El apartado 1 recoge el principio que figura en el apartado 1 del actual Protocolo, según el cual las instituciones deberán garantizar el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, definidos en el artículo 8 de la Constitución.

El apartado 2 recoge la esencia del actual apartado 9, al indicar que las consultas que la Comisión tiene que realizar antes de proponer un acto legislativo deben tener en cuenta, cuando proceda, la dimensión regional y local de las acciones consideradas.

De acuerdo con las conclusiones del Grupo, el apartado 3 prevé que todas las propuestas legislativas se remitan a los parlamentos nacionales al mismo tiempo que al legislador de la Unión (Parlamento y Consejo). Esto también se aplica a las resoluciones legislativas del Parlamento Europeo y a las posiciones comunes del Consejo.

El apartado 4 se refiere a la motivación por la Comisión de su propuesta, lo que tiene lugar mediante una ficha explicativa cuyo contenido se especifica en dicho apartado.

El apartado 5 autoriza a todo parlamento nacional a enviar, en el plazo de seis semanas, un dictamen motivado que contenga las razones por las que considera que la propuesta no se ajusta al principio de subsidiariedad. De acuerdo con la opción escogida por el Praesidium, corresponde a cada parlamento nacional organizar la consulta de cada una de las cámaras, en el caso de los parlamentos bicamerales, o, cuando proceda, de los parlamentos regionales con competencias legislativas.

El apartado 6 incorpora la noción de umbral (un tercio) y sus efectos. Si se supera, la Comisión debe volver a estudiar su propuesta, pudiendo mantenerla, modificarla o retirarla. Su decisión tiene que ir motivada.

El apartado 7 introduce, de acuerdo con las conclusiones del Grupo I, la posibilidad de que los parlamentos nacionales vuelvan a intervenir entre la convocatoria de la reunión del Comité de Conciliación y su celebración, y describe cómo se realiza esta intervención.

El apartado 8 se refiere al Tribunal de Justicia. La interposición del recurso por violación del principio de subsidiariedad corresponde a los Estados miembros, a instancia si procede de sus parlamentos nacionales. El Comité de las Regiones también podrá interponer tales recursos respecto de actos legislativos sobre los que se le haya consultado.

El apartado 9 recoge, sin modificarla, una disposición que ya figura en el apartado 9 del actual Protocolo y que establece que la Comisión presentará al Consejo Europeo, al Parlamento Europeo y al Consejo un informe anual sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Dicho informe deberá remitirse asimismo al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social.

PROYECTO
[PROTOCOLO] SOBRE EL COMETIDO DE LOS PARLAMENTOS NACIONALES
EN LA UNIÓN EUROPEA

LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES,

RECORDANDO que el modo en que cada parlamento nacional realiza el control de la actuación de su propio gobierno con respecto a las actividades de la Unión atañe a la organización y prácticas constitucionales propias de cada Estado miembro,

DESEANDO, no obstante, impulsar una mayor participación de los parlamentos nacionales en las actividades de la Unión Europea e incrementar su capacidad para manifestar su opinión en aquellos asuntos que consideren de especial interés,

HAN CONVENIDO en las disposiciones siguientes, que se incorporarán como anexo a la Constitución:

- I. Información a los parlamentos nacionales de los Estados miembros
 1. Todos los documentos de consulta de la Comisión (libros blancos y verdes y comunicaciones) serán transmitidos directamente por la Comisión a los parlamentos nacionales de los Estados miembros.
 2. La Comisión remitirá todas sus propuestas legislativas directamente a los parlamentos nacionales de los Estados miembros y, simultáneamente, al Parlamento Europeo y al Consejo.
 3. Los parlamentos nacionales de los Estados miembros podrán dirigir a los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión un dictamen motivado sobre la conformidad de una propuesta legislativa de la Comisión con el principio de subsidiariedad, con arreglo al procedimiento previsto en el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

4. Entre el momento en que la Comisión transmita al Parlamento Europeo, al Consejo y a los parlamentos nacionales de los Estados miembros una propuesta legislativa en sus respectivas versiones lingüísticas y la fecha de inclusión de dicha propuesta en el orden del día del Consejo con miras a su adopción o a la adopción de una posición en el marco del procedimiento legislativo previsto en el artículo [X de la Parte II del Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa], deberá transcurrir un plazo de seis semanas, salvo excepciones por motivo de gran urgencia, debiendo mencionarse éstos en el acto o la posición común.
5. Los órdenes del día y los resultados de las sesiones del Consejo se comunicarán directamente a los parlamentos nacionales de los Estados miembros.
6. La Comisión remitirá a título informativo a los parlamentos nacionales de los Estados miembros, al mismo tiempo que al Parlamento Europeo y al Consejo, todo instrumento de programación legislativa o de estrategia política que presente a ambas instituciones.
7. El Tribunal de Cuentas remitirá a título informativo su informe anual a los parlamentos nacionales de los Estados miembros, al mismo tiempo que al Parlamento Europeo y al Consejo.
8. El Parlamento Europeo estudiará junto con los parlamentos nacionales el modo de potenciar de manera eficaz la cooperación interparlamentaria en el seno de la Unión Europea.
9. La Conferencia de Órganos Especializados en Asuntos Europeos, instituida los días 16 y 17 de noviembre de 1989, podrá dirigir al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión cualquier contribución que juzgue conveniente. Dichas contribuciones no vincularán en absoluto a los parlamentos nacionales ni prejuzgarán su posición.

**COMENTARIOS RELATIVOS AL PROYECTO DE PROTOCOLO SOBRE EL COMETIDO
DE LOS PARLAMENTOS NACIONALES**

La introducción del Protocolo reproduce el texto actual, precisando que "el modo en que cada parlamento nacional realiza el control" de la actuación de su propio gobierno atañe a la organización interna de cada Estado miembro, y sustituyendo los términos "al Tratado de la Unión Europea y a los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas" por "a la Constitución". El texto actual es el siguiente:

"LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES,

RECORDANDO que el control que realiza cada Parlamento nacional de la actuación de su propio gobierno con respecto a las actividades de la Unión atañe a la organización y prácticas constitucionales propias de cada Estado miembro,

DESEANDO, no obstante impulsar una mayor participación de los parlamentos nacionales en las actividades de la Unión Europea e incrementar su capacidad para manifestar su opinión en aquellos asuntos que consideren de especial interés,

HAN CONVENIDO en las disposiciones siguientes, que se incorporarán como anexo al Tratado de la Unión Europea y a los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas:"

El apartado 1 recoge el texto del apartado 1 de la Parte I del Protocolo de Amsterdam: "Todos los documentos de consulta de la Comisión (libros blancos y verdes y comunicaciones) se transmitirán puntualmente a los parlamentos nacionales de los Estados miembros", adaptándolo a la recomendación del Grupo IV relativa a la transmisión directa de los documentos de la Comisión a los parlamentos nacionales.

El apartado 2 se basa en el apartado 2 del Protocolo de Amsterdam: "Las propuestas legislativas de la Comisión, definidas como tales por el Consejo de conformidad con el apartado 3 del artículo 207 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, se comunicarán con la suficiente antelación para que el Gobierno de cada Estado miembro pueda velar por que su parlamento nacional las reciba convenientemente", y recoge la recomendación del Grupo IV de que la Comisión transmita todas sus propuestas directamente a los parlamentos nacionales al mismo tiempo que al Parlamento Europeo y al Consejo.

El apartado 3 constituye una referencia al cometido de los parlamentos nacionales en el contexto del mecanismo de alerta rápida en materia de subsidiariedad, descrito en el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

El apartado 4 recoge los términos del apartado 3 del Protocolo de Amsterdam: "Entre el momento en que la Comisión transmita al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta legislativa o una propuesta de una medida que deba adoptarse en virtud del Título VI del Tratado de la Unión Europea en todas sus versiones lingüísticas y la fecha de inclusión de dicha propuesta en el orden del día del Consejo para que éste decida al respecto bien la adopción de un acto, o bien la adopción de una posición común de conformidad con los artículos 251 ó 252 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, deberá transcurrir un plazo de seis semanas, salvo excepción por motivos de urgencia, debiendo mencionarse éstos en el acto o la posición común", adaptando el texto para tener en cuenta las recomendaciones del Grupo IX en relación con el procedimiento de toma de decisiones para la adopción de los actos legislativos de la Unión. Se suprime asimismo la referencia específica a las propuestas de medidas que deban adoptarse en aplicación del Título VI del Tratado de la Unión Europea, de conformidad con las recomendaciones del Grupo X en relación con la reforma de los instrumentos jurídicos en este ámbito, así como con las recomendaciones generales del Grupo IX al respecto, puesto que la "propuesta legislativa" del texto modificado deberá abarcar también tales medidas.

Los apartados 5 a 7 recogen las recomendaciones del Grupo IV sobre la comunicación a los parlamentos nacionales de los resultados de los trabajos del Consejo (añadiendo asimismo la comunicación de los órdenes del día), de la estrategia política anual y del programa legislativo y de trabajo anual de la Comisión, así como del informe anual del Tribunal de Cuentas.

El apartado 8 (nuevo) refleja la voluntad, manifestada varias veces por el Parlamento Europeo, de fomentar, junto con los parlamentos nacionales, la cooperación interparlamentaria.

El apartado 9 recoge en un texto simplificado (puesto que resultaban superfluas las referencias del texto actual a determinados ámbitos específicos) el contenido esencial de los apartados 4 a 7 del actual Protocolo, la posibilidad de que la COSAC (Conferencia de los Órganos Especializados en Asuntos Europeos) dirija al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión cualquier contribución que juzgue conveniente. Texto del Protocolo de Amsterdam en relación con la COSAC:

"4. La Conferencia de Órganos Especializados en Asuntos Europeos, en lo sucesivo denominada COSAC, creada en París los días 16 y 17 de noviembre de 1989, podrá dirigir a las instituciones de la Unión Europea cualquier contribución que juzgue conveniente, basándose en particular, en proyectos de textos normativos que los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros decidan de común acuerdo transmitirle, en función de la naturaleza de los asuntos que traten.

5. La COSAC podrá estudiar cualquier propuesta o iniciativa legislativa relacionada con la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia que pueda tener consecuencias directas en los derechos y libertades de las personas. Se informará al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión de cualquier contribución realizada por la COSAC con arreglo al presente punto.

6. La COSAC podrá dirigir al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión cualquier contribución que juzgue conveniente sobre las actividades legislativas de la Unión, en particular respecto de la aplicación del principio de subsidiariedad, el espacio de libertad, seguridad y justicia, así como respecto de las cuestiones relativas a los derechos fundamentales.

7. Las aportaciones de la COSAC no vincularán en absoluto a los parlamentos nacionales ni prejuzgarán su posición."